

La “Guerra del Gas” en Bolivia. Representaciones sobre neoliberalismo y el rol del Estado en la defensa de los recursos naturales en la crisis de octubre de 2003

Jimena Costa Benavides*

Este texto ofrece un análisis comparativo de las representaciones sobre neoliberalismo y sobre el rol del Estado en la defensa de los recursos naturales durante la crisis política de octubre de 2003 en Bolivia, denominada la “Guerra del Gas”. El objetivo es mostrar que las contradicciones entre esas representaciones son uno de los factores que producen y profundizan la crisis de legitimidad de la democracia boliviana.

La investigación se realiza a partir del análisis político del contexto contemporáneo boliviano y del análisis de los discursos de los dirigentes de las principales organizaciones políticas de la sociedad en la crisis: el movimiento de productores de hoja de coca del Chapare boliviano, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y la Central Obrera Boliviana (COB); para luego contrastarlo con el discurso del principal partido de la coalición gubernamental –el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el cual llevó a cabo las reformas neoliberales en dos gestiones: 1985 a 1989 y 1993 a 1997, con el apoyo de los grandes partidos del sistema boliviano, quienes continuaron y profundizaron las mismas.

Debe tomarse en cuenta que el régimen democrático en una sociedad pluricultural como la boliviana, tiene características muy complejas por su heterogeneidad y que en este tipo de contexto los procesos políticos e ideológicos se asientan en una sociedad pluriétnica, multilingüe y fragmentada con al menos tres tipos de fuentes sociohistóricas: relaciones de orden intercultural, intersocial e interregional (redes de relaciones entre diversas culturas, sistemas de estratificación de clase y articulaciones en y entre las sociedades regionales o locales y el Estado

* Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Investigadora becaria del Programa Cultura, Comunicación y Transformaciones Sociales, Convenio UCV – Fundación Rockefeller.
Correo electrónico: jimenaconstab@yahoo.com.mx

central); la convivencia de distintos tiempos históricos y culturales que parten del mundo andino pre-colonial y se complejizan a lo largo de la historia; y las relaciones externas con otros Estados y organismos internacionales que influyen sobre los procesos internos (Calderón y Laserna, 1994).

La “Guerra del Gas” buscó redefinir el sistema político, sus prácticas, y la orientación del modelo. Expresa una propuesta alternativa al patrón de poder mundial que promueve la difusión y expansión del modelo de ingeniería política, social y económica denominado “neoliberal”, basado en un libre mercado que redefine las relaciones entre los ámbitos “público” y “privado”, en el cual el Estado democrático tiene un papel limitado bajo el supuesto de que la obligación de la autoridad política no es perseguir sus propios intereses sino promover –a través del imperio de la ley– las condiciones de seguridad colectiva, de orden público y la provisión de un número limitado de bienes eficientemente administrados por el mercado, donde las desigualdades no justifican un intervencionismo corrector. Esta visión implica el debilitamiento del Estado en ciertas estructuras e instancias institucionales. Pero no sucede lo mismo en el imaginario político de la sociedad donde el Estado sigue teniendo un rol central en la vida nacional y cuya imagen no se ha minimizado. Por lo cual en momentos de crisis –como la de octubre de 2003– se pone en evidencia la existencia de proyectos de “recuperación” del Estado que cohesionan a la sociedad, que es responsable de lograr las metas colectivas y no sólo de “regular” el ámbito privado.

Las contradictorias imágenes de “Estado”

La crisis de octubre tiene un origen multicausal, pero considero que son tres los factores principales que contribuyen a su gestación: la existencia de dos visiones acerca del Estado en el imaginario político boliviano; la existencia de dos visiones respecto de la democracia; y la asociación del régimen político democrático con el modelo neoliberal. Todos ellos contribuyen a ampliar la brecha entre sociedad y sistema político, profundizando la crisis de legitimidad, credibilidad y representatividad del segundo. Veamos cada uno de ellos.

Durante el periodo democrático y hasta el presente, el imaginario político enfrenta dos visiones contradictorias respecto al Estado: una basada en la estatolatría de los actores sociales que ven al Estado con la obligación de atender y resolver todos los problemas públicos, y aun privados, producto de la imagen de Estado-nación que se difunde con la Revolución Nacional de 1952¹; otra que ve al Estado como ente regulador-normador que delega responsabilidades en el sector privado, distante de la

1. La Revolución Nacional Boliviana se llevó a cabo en abril de 1952 a partir de la vanguardia partidaria del Movimiento Nacionalista Revolucionario y con apoyo de los sindicatos obreros cuyo origen era stalinista y trotskista. El principio articulador del movimiento político fue de corte estatista y nacionalista, funcionaron durante doce años como sistema de partido único neutralizando a una débil oposición, y ganaron tres elecciones consecutivas: 1956, 1960 y 1964. A partir de 1964 y después de un golpe de Estado de la Fuerzas Armadas, se inicia en Bolivia el ciclo de 19 años de dictaduras militares.

sociedad y que se rige de acuerdo a “recomendaciones” de los organismos internacionales, o sea el Estado neoliberal.

Las reformas políticas y sociales implementadas durante la Revolución de 1952 tienen efectos centrales sobre el imaginario político y las representaciones sociales sobre el rol del Estado. El primer gobierno del MNR (1952-1956) estableció el monopolio en la exportación del estaño, alentó la política petrolera, recuperó el control sobre explotación y exportación de productos y recursos naturales, promovió la diversificación económica, la vertebración caminera del país, la inversión pública en el oriente –hasta entonces concentrada en la zona andina, la industrialización, la producción de petróleo, el fomento al sector agrícola e implementó medidas estructurales como:

- a) El decreto del Voto Universal (julio, 1952), con el que se rompió la democracia excluyente y el voto calificado, haciendo elegible a cualquier persona mayor de edad. La ampliación de la participación y el ejercicio de la ciudadanía política fueron de impacto central en el imaginario colectivo, no sólo por el incremento de electores en un 761% entre las elecciones presidenciales de 1951 y 1956, sino porque se institucionalizó el derecho de elegir gobernantes para la mayoría de la población.
- b) El decreto de Nacionalización de las Minas (octubre, 1952), a través del cual el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. El objetivo fue tomar el control total de la economía y descabezar a los grandes mineros del estaño, para que el Estado volviera a administrar sus recursos naturales para desarrollar el país.
- c) El decreto de Reforma Agraria (agosto, 1953) que devolvió la tierra a los campesinos e incorporó a casi 2 millones de personas en la economía interna. Se procedió a la parcelación de tierras, distribuyéndose grandes extensiones entre los indígenas en el transcurso de los siguientes años.
- d) El Código de Educación (1955) que la hizo universal y obligatoria, con instalación de núcleos escolares rurales para los campesinos.

El gobierno revolucionario aprobó nuevos Códigos de Petróleo y Seguridad Social, una Ley de Cooperativas y, en 1961, una reforma constitucional que incluyó las minas nacionalizadas como patrimonio del Estado, el voto universal y estableció la reelección. En 1962 estableció la premisa de lucha contra la pobreza con lógica desarrollista bajo planificación estatal.

El MNR reorganizó sus fuerzas junto a la COB –de la cuál se insertaron tres ministros en el gabinete del nuevo gobierno: Juan Lechín, Germán Butrón y Ñuflo Chávez Ortiz; los campesinos comenzaron a organizar sindicatos bajo influencia del partido, y se crearon milicias mineras y campesinas que apoyaban fielmente a la revolución como activos participantes del proceso político.

Desde entonces y hasta 1979, el Nacionalismo Revolucionario (NR) fue el articulador del proceso ideológico boliviano (Antezana, 1983: 60), que hizo que el eje de legitimación del poder del Estado –y del gobierno- se produzca a partir de la

articulación con algún actor social estratégico incluso en los gobiernos de facto posteriores a la revolución: durante el periodo revolucionario (1952-1964) la base social fueron mineros y obreros; durante el periodo dictatorial (1964-1982) fue el pacto militar-campesino. Bajo la influencia del NR los gobiernos se legitimaban con la participación directa del algún sector popular y no sólo a través de la emisión del voto.

El proceso democrático y el sentido de “democracia”

Los cambios en el modelo estatista se producen a partir del periodo de continuidad democrática iniciado en 1982 y consolidado en 1985², desde entonces rige la democracia representativa. Producto de la pluriculturalidad y la fragmentación social no existen mayorías absolutas en el comportamiento del voto, lo que llevó al sistema político a depender de la conformación de alianzas en el Congreso para la designación del gobierno. En su primera fase (1985-1997) esta democracia pactada posibilitó la estabilidad del régimen y la implementación de diversas y trascendentales reformas políticas e institucionales que le dan nuevas características al sistema. Pero en su segunda fase (1997-2003) debilitó la separación y equilibrio de los poderes públicos, atenuó el rol de fiscalización del parlamento sobre el gobierno, posibilitó el incremento de la corrupción política, el mal uso de los escasos recursos públicos y amplió la brecha entre ciudadanos y representantes, factores que sumados contribuyeron a la generación de la crisis.

Ahora bien, desde el periodo de lucha contra las dictaduras militares existían al menos dos representaciones sociales de “democracia” en el imaginario político: la de la elite político-partidaria que postula una democracia representativa con delegación de soberanía popular a representantes elegidos en procesos regulares y transparentes; y la de las organizaciones políticas de la sociedad que postulan una democracia participativa y directa de lógica asambleísta, que promueva la justicia social, redistribución de ingresos y solución a todos los problemas nacionales desde el Estado. La ausencia de intersubjetividad entre ambas percepciones nunca ha sido resuelta, y la democracia institucionalizada durante más de dos décadas corresponde a la percepción de la elite política no a la del conjunto social, por lo que muchos actores sociales cuestionan el régimen político.

En este contexto, para la consolidación de la visión de democracia representativa de las elites en Bolivia, fue fundamental la influencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y

2. Los sucesivos gobiernos democráticos son: Unión Democrática y Popular (UDP) de 1982 a 1985; Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) de 1985 a 1989; Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) con ADN y Conciencia de Patria (CONDEPA) de 1989 a 1993; MNR con el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), el Movimiento Bolivia Libre (MBL) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS) de 1993 a 1997; ADN junto al MIR, UCS, CONDEPA, además del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Katarismo Nacionalista Democrático (KND) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de 1997 a 2002; y por último, MNR, ADN, MIR, NFR, MBL, UCS y el Partido Socialista – 1 (PS-1) de 2002 a 2003. El gobierno de Carlos Mesa (el que asume el poder tras la renuncia de Sánchez de Lozada) no tiene ninguna alianza partidaria.

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los procesos políticos internos, organismos que deben ser entendidos como actores sociales específicos, con intereses concretos, objetivos claros, que establecen relaciones de tipo global-local e intervienen en organizaciones e instituciones en un contexto de relaciones sociales, políticas y económicas atravesadas por desiguales relaciones de poder, conflictos de intereses y representaciones de la experiencia (Mato, 2001: 352).

Para analizar esas influencias es fundamental pensar la globalización a partir de aspectos culturales que consisten en flujos de bienes y mensajes relativamente autónomos generados por actores sociales específicos, con intereses específicos y objetivos claros (Mato, 2001), que se vinculan a las prácticas, las instituciones, los discursos y los procesos internos, en este caso, sobre los sucesivos gobiernos bolivianos y la definición de las políticas neoliberales.

En los actuales tiempos de globalización, las representaciones sociales son producidas en el contexto de procesos sociales transnacionales e involucran actores sociales identificables tanto locales como transnacionales que se vinculan en relaciones multidimensionales: culturales, económicas y políticas (Mato, 2003). El modelo democrático-representativo y el de economía de libre mercado también son fenómenos culturales que implican sistemas de representaciones simbólicas que los hacen posibles (Costa, 2003). Las relaciones entre los Estados latinoamericanos y el BM, el FMI y el BID no son simétricas, estos organismos son agentes sociales, políticos y económicos que intervienen espacios locales, imponen relaciones y exigencias y las sustentan con la dependencia financiera, el apoyo político y la reproducción de su discurso buscando hacerlo hegemónico. Es pues fundamental tomar en cuenta su influencia y las representaciones sociales que producen y reproducen sobre los procesos internos, en el análisis de la generación de la crisis política boliviana. La adopción de las “recomendaciones” de dichos organismos ha llevado a Bolivia a una ampliación de la brecha entre sociedad y Estado, por lo que el factor de cohesión social que éste representaba se debilita, la sociedad se fragmenta aun más y se pierde la visión de totalidad.

La asociación de “democracia” con “neoliberalismo” en el imaginario político

El tercer factor que genera la crisis es la asociación del régimen democrático con el modelo neoliberal que se inicia con el primer gobierno de democracia pactada establecido entre el MNR y Acción Democrática Nacionalista (ADN) durante el periodo 1985-1989. Este gobierno aplicó las reformas de primera generación³ y dio

3. Se denominan así las recomendaciones del FMI y BM para América Latina bajo el nombre de “Consenso de Washington”: disciplina fiscal, redireccionamiento de las prioridades del gasto público hacia campos que permitan alto retorno económico y mejoren la distribución de ingresos en áreas como salud, educación e infraestructura; reforma impositiva, reduciendo las tasas y ampliando la base; liberalización de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; liberalización del comercio; liberalización de los flujos de inversión extranjera directa; privatización; desregulación; seguridad para derechos de propiedad.

paso a la economía de libre mercado en un momento en que la economía estaba en una crítica situación con cuatro años de crecimiento negativo, un elevado déficit fiscal, endeudamiento externo y un proceso hiperinflacionario que llegó al 11.495%. La situación en la que se inició el periodo era caótica: hiperinflación con ingobernabilidad, un ambiente mundial inestable que afectó adversamente al país con altas tasas de interés internacionales, resistencia a otorgar créditos a países altamente endeudados, y la caída del precio internacional del estaño.

El gobierno se posesionó el 6 de agosto de 1985 y el principal instrumento de la “Nueva Política Económica” (NPE) neoliberal –el Decreto Supremo 21060- se promulgó el 29 de agosto, es decir, precisamente en el momento que se consolida el régimen democrático con la primera elección “regular” después de dos décadas de dictaduras militares, se implementan las reformas neoliberales de modo que en el imaginario político ambos acontecimientos son asociados.

Durante esa gestión Gonzalo Sánchez de Lozada fue el ministro reconocido como el autor intelectual de las reformas y la NPE que sientan las bases para la adopción de la nueva cultura, basada en una lógica individualista y competitiva, en la disolución de identidades colectivas y atomización del movimiento popular. ¿Cuáles fueron las acciones desde el Estado? La política fiscal fue enfocada en el incremento de las recaudaciones, reducción al gasto del gobierno –despidos masivos, cierre de varias minas, despido de 23 mil mineros y de otros empleados públicos-, reducción de la inversión social, y eliminación de las empresas públicas con incremento del desempleo. El objetivo era aproximarse al déficit fiscal cero, para lo que se congelaron los salarios a niveles nominales y la inversión pública, así como se impuso la obediencia estricta al presupuesto, se elevó el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo y se exigió el pago de impuestos atrasados. Esa fue la marca del modelo neoliberal, y desde entonces la comunidad política boliviana asocia democracia con neoliberalismo como algo negativo, por lo que cada vez que se cuestiona el neoliberalismo se desgasta la legitimidad democrática.

Posteriormente, en su primer gobierno constitucional, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) llevó adelante las reformas de segunda generación ⁴ que fueron respuesta a demandas sociales postergadas por más de una década. La descentralización administrativa y la municipalización del país institucionalizaron nuevos mecanismos de participación ciudadana y de redistribución más equitativa de los recursos públicos hacia las zonas más vulnerables a través de los gobiernos locales, medidas que contribuyeron a generar apoyo de la sociedad al sistema político. Durante ese periodo se aprobó la reforma constitucional –1995- que reconoció la pluriculturalidad, se promulgaron las leyes de Participación Popular (LPP 1551), de Reforma Educativa (LRE 1565), de Descentralización Administrativa (LDA 1654), y diversas leyes so-

4. Se denominan así las recomendaciones de los organismos multilaterales del Post Consenso de Washington que incorporan elementos como el medio ambiente, la distribución del ingreso, fortalecimiento de la democracia, la regulación fiscal, políticas que promuevan la competencia, la transferencia tecnológica y la transparencia.

ciales como el Seguro Materno-Infantil y el Seguro de Vejez; se introdujeron las Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, las diputaciones uninominales, el Consejo de la Judicatura y otras instancias que mejoraron la gestión pública; pero también se promulgó la Ley de Capitalización que pasa el 51% de las acciones de propiedad de las empresas públicas a nombre de “los bolivianos” –por lo que el Estado no puede tomar decisiones respecto a su uso, y el otro 49% pasa a empresas privadas nacionales o extranjeras; y la Ley de Pensiones con fuerte incidencia sobre el déficit fiscal.

El desgaste del proceso: la gestión Banzer

A partir del gobierno constitucional de Hugo Banzer Suárez⁵ (1997-2002) se inicia la fase de desgaste de la democracia pactada. La alianza de gobierno –denominada “Mega coalición” por tener 7 partidos miembros- produjo la captura de dos tercios de los votos en el Congreso, ocasionando la casi total anulación de su función de fiscalización, por lo que hubo mayor ineficiencia en el uso de recursos públicos, incremento en los casos de corrupción e impunidad de las autoridades. La “Mega coalición” enfrentó dos severas crisis políticas en abril y septiembre de 2000. Uno de los factores que generó conflictividad fue el recurso agua: campesinos y sectores populares urbanos del departamento de Cochabamba e indígenas de la zona del Lago Titicaca en La Paz, llevaron adelante diversas movilizaciones y enfrentamientos con el gobierno defendiendo el uso de dicho recurso natural. La demanda central era la recuperación de manos privadas de la administración del agua, por lo que ese proceso se denominó la “Guerra del Agua” y la principal organización de los sectores en conflicto se denominó “Coordinadora del Agua”, estableciéndose así un factor común a la crisis de octubre con la conformación de un ente articulador denominado la “Coordinadora del Gas” durante la “Guerra del Gas”.

La “Mega coalición” contribuyó a profundizar el desgaste del proceso al incorporar la mayoría de los instrumentos recomendados por el Marco Integral de Desarrollo⁶ del BM en su agenda de gobierno⁷. Este Marco establece una detallada metodología de consultas con la sociedad civil para validar y legitimar las políticas públicas, por lo que el gobierno introdujo la realización regular de “Diálogos Nacio-

-
5. Hugo Banzer Suárez fue presidente de facto desde el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 hasta 1978. Su dictadura se caracterizó por el uso indiscriminado de la violencia, el nepotismo, la ineficiencia, el incremento acelerado de la deuda externa y la proscripción de la actividad política partidaria y sindical en el territorio nacional.
 6. Los once puntos del Marco Integral de Desarrollo son: disciplina fiscal basada en reglas; atemperamiento de los efectos cíclicos de expansión y de colapso; redes de seguridad social que se activen en forma automática; escuelas para los pobres; gravar a los ricos y gastar más en el resto; oportunidades a pequeñas empresas; fortalecer los derechos de los trabajadores; luchar francamente contra la discriminación; reparar los mercados de la tierra; servicios públicos orientados al consumidor; reducir el proteccionismo de los países ricos.
 7. El “Plan Dignidad” tenía cuatro pilares: 1) Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza; 2) las políticas de erradicación “Coca 0”; 3) la lucha contra la corrupción; y, 4) Programa de Reforma Institucional para transparentar la gestión pública.

nales” con representantes de las organizaciones sociales, dando lugar a una inflación de expectativas de participación, ya que éstas erradamente supusieron que las determinaciones adoptadas en esas consultas tenían carácter vinculante. La “lucha contra la pobreza” también generó algunas resistencias sociales, debido a que diversos sectores se negaban a ser representados como “pobres” y consideraban que todas esas acciones eran un pretexto de los organismos internacionales para apropiarse de los recursos naturales en su propio beneficio.

El contexto inmediato a la crisis

El segundo gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) se inició el 6 de agosto de 2002, en un entorno de severa crisis económica y con baja legitimidad política⁸. La coalición se estableció entre seis de nueve partidos con representación congresal y enfrentó una crisis de imagen y credibilidad desde su origen, debido a que las negociaciones que establecieron la alianza tuvieron predominio de intereses particulares. El gobierno nació sin hegemonía ni coordinación interna, abandonó el proceso de municipalización y descentralización, tuvo actuación oportunista de los aliados y pugnas por cuotas de poder, factores que llevaron a la gestión hacia una alta ineficiencia y un decreciente consenso social.

El escenario puede resumirse en crisis del sistema de representación política; crisis del régimen político con pérdida de legitimidad; y, crisis del sistema de valores y creencias o de la cultura política (Costa, De la Riva y Orozco, 2003: 2). La primera crisis política se presentó en febrero de 2003 y evidenció la fragmentación de la coalición, el predominio de intereses particulares, la indiferencia del sistema de partidos ante la pérdida de confianza societal, y la ineficiencia de la gestión pública: la política antidrogas no redujo efectivamente la superficie de cultivos de coca excedentaria; la política de hidrocarburos se concentró en la renegociación de contratos y la búsqueda de nuevos compradores sin antes ser legitimada por la sociedad; y las políticas sociales (Seguro Universal Materno Infantil y Bonosol para la tercera edad) fueron cuestionadas debido a sus limitadas condiciones operativas y su dudosa sostenibilidad. A todo esto se añaden los índices de pobreza. Sumados, estos factores contribuyeron a profundizar la crisis.

Los sucesos de octubre: “no a la venta del gas”

La ideología neoliberal individualista y utilitaria también ha tenido impacto sobre la comunidad política, de modo que las organizaciones sociales están atomizadas y ninguna de ellas tiene capacidad hegemónica; a pesar de ello, en octubre de 2003 los sectores populares se articulan para impedir la venta del gas sin valor agregado.

8. Los resultados de las elecciones generales de 2002 fueron: MNR 22,46%; MAS 20,96%; NFR 20,91%; MIR 16,32%; MIP 6,09%; UCS 5,51%; ADN 3,4%; LyJ 2,72%; PS 0,65%; MCC 0,63% y CONDEPA 0,37%.

Bolivia es una de las tres principales potencias gasíferas de América con la existencia aproximada de 54,9 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural. Las organizaciones populares demandan la industrialización de dicho recurso estratégico previa a cualquier exportación. El gas puede generar importantes ingresos y puestos de trabajo mediante la producción de fertilizantes, plásticos, hierro, acero, e incluso la instalación de plantas termoeléctricas. La política adoptada por Sánchez de Lozada fue la de vender el gas licuado al mercado externo –Estados Unidos específicamente, sin valor agregado. El mismo se entregaría vía gasoducto atravesando Chile, país que paradójicamente excluyera a Bolivia de su única salida al mar durante la injusta guerra de 1879⁹. Semejante despropósito desencadenó la ira de la opinión pública y de las organizaciones sociales que surgieron con el nacionalismo revolucionario: la central obrera y los sindicatos campesinos.

El origen de la crisis puede relacionarse con las reformas que se inician en 1985 con el Decreto Supremo (D. S.) 21060 y se complementa con procesos como la capitalización de las empresas en 1995. El desempleo, el retroceso en la legislación laboral, la competencia en un contexto internacional sin condiciones de competitividad, el cierre de empresas, el funcionamiento parcial de otras, la inseguridad y la creciente pobreza, son componentes del imaginario político asociados con las reformas neoliberales y con el MNR.

La crisis se inicia en septiembre y concluye el 18 de octubre con la posesión del vicepresidente Carlos Mesa como Presidente Constitucional. Los primeros días de septiembre el gobierno declaraba que la decisión final sobre la venta del gas dependía de la gestión pública, mientras que el Congreso frenaba la designación de 50 autoridades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, lo que prácticamente paralizaba al Estado. Mientras tanto, indígenas del Lago Titicaca en La Paz exigían auditorías a los gobiernos locales de la provincia y la liberación de un dirigente – Edwin Huampo- que había sido acusado de asesinato durante la gestión de Banzer. Entonces se produjeron los primeros enfrentamientos con costo de 6 vidas, 22 heridos, 7 desaparecidos y 21 detenidos.

A raíz de la represión, el conflicto se extendió rápidamente y en pocos días diversos sectores se habían incorporado con pliegos petitorios de incontables puntos y una negativa casi generalizada a la venta del gas como estrategia para presionar a un gobierno formado por los partidos que promovieron las reformas neoliberales (MNR, ADN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR]), a un Presidente considerado el autor intelectual de dichas reformas (Gonzalo Sánchez de Lozada), y a un partido en cuyas gestiones se implementaron las mismas (MNR). Mientras tanto, los partidos

9. Después del descubrimiento de yacimientos de plata en Caracoles, cobre en Chuquicamata, y depósitos de guano y salitre en la costa boliviana, el Congreso boliviano sancionó una Ley para incrementar 10 centavos el quintal de salitre exportado por el puerto boliviano de Antofagasta. Inmediatamente, las empresas chilenas e inglesas asentadas en territorio boliviano se negaron a pagar el mencionado impuesto y en febrero de 1879 tropas chilenas desembarcaron y ocuparon el territorio boliviano. Recién en abril de ese mismo año se formalizó la declaración de guerra.

en el Congreso se concentraban en la distribución de espacios de poder y no en la búsqueda de la gobernabilidad necesaria para salir de la crisis económica y política.

A inicios de octubre el gobierno intentó mostrar voluntad política de atención a los problemas sociales presentando una propuesta para los siguientes tres meses, e inició con las Fuerzas Armadas un proceso de consulta respecto de la exportación del gas. Mientras tanto, el Congreso nombraba a un Defensor del Pueblo sin legitimidad y en un proceso con diversas irregularidades que fueron de conocimiento público. Ambas acciones carecían de apoyo social y contribuyeron a profundizar la crisis política.

El 8 de octubre se inició una huelga general indefinida con bloqueos de caminos en la ciudad de El Alto de La Paz, bajo la dirección de la Central Obrera Regional. La deteriorada imagen del sistema político se concentró en la figura presidencial en un contexto ideológico caudillista y personalista, y cualquier cambio en la orientación de la gestión ya parecía demasiado tardío. La Paz –sede de gobierno- se encontraba desabastecida de alimentos y al borde de la hambruna, sin gasolina y con temor por los sucesos en la ciudad de El Alto, la cual parecía un campo de batalla con 26 muertos y 67 heridos –la mayoría de bala- sólo en el primer día de enfrentamientos.

Sin comprender la magnitud de la crisis de confianza en las instituciones establecidas, el gobierno responsabilizó al líder cocalero Evo Morales y a su partido –el Movimiento al Socialismo, MAS- por los acontecimientos. En realidad las organizaciones en conflicto no tenían un eje de articulación hegemónica. El 14 de octubre el Presidente estaba dispuesto a ceder posiciones ante la demanda de consulta popular sobre el gas, pero después de un nuevo enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y mineros, con diversos sectores en conflicto en seis de los nueve departamentos y con 46 huelgas de hambre alrededor del país y en el exterior exigiendo la pacificación, la demanda central de “no a la venta del gas” terminó con la solicitud de renuncia al Presidente. El 16 de octubre Sánchez de Lozada renunció y se trasladó a Miami (EE UU) junto a sus más cercanos colaboradores.

La vinculación de la imagen del Presidente con los Estados Unidos, con la capitalización, con lo extranjero, con los organismos internacionales y con el neoliberalismo, agotó su capacidad de interpelación. El MNR pasó de ser el partido que construyó el Estado-nación en 1952 al partido de la anti-nación y del “gringo vende patria”, como era denominado Sánchez de Lozada por los sectores populares por su dificultad para hablar sin acento inglés el castellano y por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

Al momento de redactar este artículo (abril, 2005), el gobierno de Carlos Mesa se encuentra institucionalizando nuevos mecanismos de participación que surgen como consecuencia de la crisis de octubre, para mantener la gobernabilidad: el referéndum vinculante sobre el gas y la asamblea constituyente. Ninguno de ellos garantiza la estabilidad política ya que –como aquí se argumenta, existen diferentes representaciones sociales sobre el Estado, sobre el uso de los recursos naturales y sobre la participación social en el escenario político.

Las representaciones de “neoliberalismo” y el rol del Estado en la defensa de los recursos naturales en la crisis

Las demandas iniciales de los sectores en conflicto eran diversas y dispersas, después confluyen en la negativa a aceptar la venta del gas por Chile y a Estados Unidos, luego se articulan alrededor de la demanda de recuperación del gas para los bolivianos y terminan exigiendo la renuncia del Presidente. Este proceso articula un descontento generalizado con las medidas neoliberales implementadas por el sistema político bajo la influencia de los organismos internacionales. La “Guerra del Gas” puede ser interpretada como un intento de recomposición de la sociedad para recuperar el Estado, ese Estado que gradualmente se achica, que regula y norma, pero que ya no cumple con la función de cohesión de la sociedad ni de realización de las metas colectivas.

Desde las crisis políticas de abril y septiembre de 2000 y en las crisis de febrero y octubre de 2003, fueron tres las organizaciones políticas de la sociedad que cobraron centralidad y se fortalecieron gradualmente:

- a) El Movimiento al Socialismo (MAS) y su principal representante, Evo Morales, quien además de ser diputado nacional es Secretario Ejecutivo de la Confederación de Colonizadores del Chapare y líder principal del movimiento cocalero del Departamento de Cochabamba. Los “cocaleros” del Chapare surgen con el proceso de despidos masivos de las reformas de 1985. A los 23 mil mineros despedidos se les dio el nombre de “relocalizados”, porque inicialmente el gobierno se comprometió a “localizarles” nuevos puestos de trabajo, y al no poder cumplir dicho compromiso, más bien promovió el traslado y colonización de los mineros hacia otras zonas del territorio nacional para promover el trabajo productivo. Algunos de esos mineros se hicieron productores de la hoja de coca, la cual mantiene un consumo “tradicional” sobre todo entre la población indígena de la zona andina de Bolivia y Perú.
- b) La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su Secretario Ejecutivo, Felipe “Mallku” Quispe, quien además es Jefe Nacional del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). Al igual que la COB, el origen del sindicalismo campesino tiene relación directa con la Revolución de 1952 a partir de la Reforma Agraria, del fortalecimiento y expansión de las federaciones campesinas y posteriormente debido al pacto militar campesino de 1964 bajo el paraguas del nacionalismo revolucionario. La CSUTCB se fundó el 26 de junio de 1979 en un congreso de unidad convocado por la COB y en ella están representadas todas las federaciones sindicales agrarias del país.
- c) La Central Obrera Boliviana (COB) y su Secretario Ejecutivo, Jaime Solares. Se fundó el 16 de abril de 1952, una semana después de la insurrección popular del 9 de abril que marca el triunfo del proceso revolucionario. Surgió de una asamblea y sus principales componentes fueron trabajadores mineros, fabriles, ferroviarios, bancarios y gráficos. En las orientaciones globales que

presentaron desde su fundación reivindican la nacionalización de las minas, de los ferrocarriles, la revolución agraria, y señalan la importancia de mantener la independencia política nacional e internacional (Lazarte, 1988: 5-7). El movimiento obrero fue el principal actor que acompañó al MNR en el proceso revolucionario.

Estas tres organizaciones fueron centrales en los conflictos de octubre de 2003 y articularon la oposición al modelo neoliberal, razón por la que en esta investigación se analizan sus discursos para determinar cuáles son las representaciones de neoliberalismo y las del rol del Estado que expresan en la lucha política para lograr la hegemonía de su discurso político.

El campo de la lucha discursiva por la hegemonía de la sociedad es el campo de la política, en ella los diferentes sectores sociales se enfrentan con el propósito de convertir sus proyectos y sus discursos en hegemónicos, la política genera el reconocimiento mutuo entre individuos, acepta y estimula identidades, altera y re-significa otras, estigmatiza las no deseables (Landi, 1981: 173-174). Podemos concebir a la política como práctica articuladora (Laclau, 1985: 26) y recordar que el campo político está constituido por una pluralidad de discursos y posiciones de enunciación que pretenden constituirse en hegemónicas. El terreno de constitución de la hegemonía es el discurso, porque toda práctica social se constituye como práctica significante (Laclau y Mouffe, 1987: 157).

Lo que otorga unidad interna a un discurso es el sistema de interpelaciones que contiene: las maneras en que son nombrados los destinatarios (Landi, 1981: 186). La interpelación es un proceso que se genera en un discurso y está dirigido a constituir una determinada identidad individual o colectiva, lo cual se logra en tanto los individuos se reconozcan en el discurso, donde cada interpelación juega un papel de condensación respecto a las demás. Entiendo el discurso como el lugar de una lucha específica por el poder, estudiar lo discursivo es estudiar reglas y relaciones de poder (Barbero, 1979: 27).

Ahora bien, para analizar un discurso hay que situarlo en el contexto de interdiscursividad en que se ubica; en ese sentido, el análisis de discurso político consiste en estudiar como tales textos producidos por líderes o miembros de alguna institución relacionada con el Estado o sistema político. Por tanto, para definir el objeto (discurso político) hacemos intervenir instituciones políticas (partidos políticos, sindicatos, etc.). El discurso político es pues, por excelencia, un vehículo de significación ideológica que busca su hegemonía y puede considerarse como la obra de unos individuos pertenecientes a un grupo, pero aunque el discurso sea del grupo no puede ser emitido por el conjunto sino por un emisor a nombre de dicho grupo. Es así que ese emisor se vuelve un locutor-intelectual-colectivo que no existe sino en la medida en que existe el discurso colectivo (Marcellesi, 1980: 96). Dicho de otro modo, el acto mismo de la enunciación está dado por un individuo. Siguiendo este razonamiento, considero los discursos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Evo Morales, Felipe Quispe y Jaime Solares como representativos de sus organizaciones políticas.

a) Evo Morales Ayma

Evo Morales articula reivindicaciones étnicas y clasistas en torno a las ideas de colonialismo y antiimperialismo, es el principal dirigente del Chapare, zona de mayor producción de coca en Bolivia, es diputado nacional desde 1997 y también es Jefe Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002 con una votación equivalente al 20,96% del electorado, frente a un 22,46% del ganador MNR.

Morales adquirió un rol fundamental en la política interna a partir de las crisis del 2000 en la gestión de Hugo Banzer, quien en la búsqueda de mayor volumen de recursos de apoyo estableció con el gobierno de Estados Unidos el acuerdo de erradicar en un 100% la producción de la coca ilegal¹⁰ en Bolivia. A partir de entonces, el movimiento cocalero y el MAS se encuentran en la oposición defendiendo la producción de la coca para consumo tradicional.

El principio articulador de su discurso gira en torno a las ideas de imperialismo y neoliberalismo, esta recurrencia temática se refuerza con elementos como: capitalismo, globalización y colonialismo.

El neoliberalismo es la reproducción del capitalismo salvaje e inhumano que sigue permitiendo la concentración del capital en pocas manos, que no da solución a las mayorías en todo el mundo. Por eso la lucha es contra la globalización en todo el mundo. En el caso boliviano, después del fracaso del capitalismo de Estado y del actual fracaso del neoliberalismo, esta vez les toca a los pueblos, a las empresas autogestionarias, colectivas (Evo Morales en entrevista realizada por Pablo Stefanoni. Santiago, 30 de agosto de 2002).

Los principales adversarios en el discurso son: las empresas transnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y Gonzalo Sánchez de Lozada, caracterizado como representante del neoliberalismo:

Yo decía, para echar a Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente, se juntaron un conjunto de cosas: la resistencia por más de 500 años contra el colonialismo interno, porque Sánchez de Lozada representa definitivamente a un modelo económico. Y hemos derrocado al símbolo del neoliberalismo. [...]. La tarea está orientada fundamentalmente a recuperar el poder político. Después de más de 500 años de sometimiento, de esclavitud, de marginamiento, de odio, los fidependidos [sic] nos organizamos para recuperar el poder político. Y una vez recuperado el poder político, recuperar el territorio, ¿qué significa?, recuperar todos los recursos naturales renovables y no renovables. [...]. Segundo, después de semejante masacre nos han unido a todos los sectores. Fuera Gonzalo Sánchez de Lozada, claro llegó la hora también al acabar con el presidente que representa los intereses de las transnacionales, porque hablar con Sánchez de Lozada era hablar con un representante de las transnacionales y no con el representante de los bolivianos, no porque es socio, sino por ser parte de la política de concen-

10. La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008 19-7-1988) contempla una zona legal de producción de hoja de coca para el consumo tradicional, la producción excedentaria a esa zona es considerada ilegal por lo que se promueven políticas de erradicación y sustitución de cultivos desde el Estado.

trar las riquezas en pocas manos (Evo Morales en entrevista realizada por Andrés López del Centro de Estudios Independientes de la Argentina. Lunes 10 de noviembre de 2003. Disponible: <<http://www.argentina.indymedia.org>>).

La caracterización del neoliberalismo en el discurso es negativa y se asocia con la explotación capitalista:

Nosotros somos una oposición al modelo, un modelo de hambre y miseria. El pueblo boliviano está cansado de este capitalismo salvaje, yo sigo convencido que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad, es el peor enemigo del medio ambiente, del planeta tierra. [...] la única alternativa que nos queda es buscar la unidad y la integración. Mayor organización para ir en defensa de nuestros pueblos, de nuestras riquezas, de nuestras empresas, y si no se produce esta unidad, vamos a seguir soportando la intromisión militar y económica de Estados Unidos (Evo Morales en entrevista realizada por Mauricio Gaete de la Agencia Mundo Posible, el 10 de abril de 2003).

El discurso político de Morales articula las ideas de venta del gas, pérdida de recursos naturales, colonialismo y sometimiento, para relacionarlas con neoliberalismo, capitalismo e imperialismo. Por otra parte, los destinatarios negativos del discurso – los adversarios- son Gonzalo Sánchez de Lozada, las empresas transnacionales y el gobierno de Estados Unidos.

b) Felipe “Mallku” Quispe

Felipe Quispe fue miembro activo del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), organización marxista-maoísta radical que promovía la estrategia de insurrección popular y lucha armada, razón por la que estuvo varios años preso, acusado de terrorismo por hacer explotar una bomba en una torre de electricidad. Su pensamiento indianista tiene un alto contenido de racismo hacia los “*Q'aras*”¹¹ y plantea el retorno a las formas de producción y organización preincaicas. Quispe ha afirmado públicamente en diversas oportunidades que desconoce al Estado boliviano y busca la constitución de un Estado indio. Desde julio de 2002 hasta junio de 2004 fue diputado uninominal. Renunció al curul para continuar su lucha desde “fuera del sistema dominante”. Es Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Jefe Nacional del partido indianista Movimiento Indígena Pachacuti (MIP). Cobra centralidad en la lucha política a partir de las crisis de 2000 con una estrategia de bloqueo y cerco a la sede de gobierno, similar a la utilizada por el líder aymara Tupac Katari durante la rebelión indígena de 1780-1781 en la colonia española.

Quispe emite un discurso con reivindicaciones étnicas que visibiliza la discriminación y exclusión de la población indígena en el proceso de construcción de na-

11. El término *Q'ara* proviene del idioma aymara y significa: desnudo, sin, pelado. En sentido social refiere a quien no tiene cultura o identidad. En su uso vulgar se asocia con lo “blanco” en alusión a diferencias raciales. El movimiento indianista boliviano aplica este término despectivamente para referirse a todo aquél que no es indio aymara.

ción, y la principal limitación del discurso es la carencia de capacidad hegemónica debido a su confrontación permanente con la población mestiza boliviana, caracterizándola como adversario político con base en diferencias fenotípicas. El discurso de Quispe asocia la apropiación de recursos naturales con las transnacionales y con los Estados Unidos, actores que junto a Gonzalo Sánchez de Lozada son caracterizados como los principales adversarios políticos:

En primer lugar, el gas sale de territorio indígena y, en segundo, queremos que se anule la Ley de Hidrocarburos, que favorece a las petroleras transnacionales. Junto a otras empresas estatales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) fue privatizada por este gobierno con muchas promesas que nunca se cumplieron. Pero ahora la gente de todo el país se ha dado cuenta de que el proyecto de exportación de gas del gobierno es un engaño. No queremos que se exporte el gas natural, que perfectamente se puede industrializar en Bolivia. Y venderlo al país que queramos, pero no a Estados Unidos, que hoy ocupa Irak y mañana puede hacer lo mismo en Bolivia (Felipe Quispe en entrevista realizada por *Rebelión*. Arde Bolivia. 14 de octubre de 2003 <<http://www.rebellion.org>> [Consultado: 18-10-2003]).

Ese gas sale del territorio indígena, es de nosotros. Pero jurídicamente hay una ley de Hidrocarburos, hay un decreto, pero, nosotros lo podemos industrializar y vender a otros países. [...] Sabemos bien que los gringos van a invadir a otros países, van a aniquilar vidas humanas como lo están haciendo en Irak, mañana podría ser Colombia, porque ya tienen un Plan Colombia, o Venezuela, y hasta el mismo Ecuador. Antes eran los partidos comunistas los enemigos acérrimos de los gringos, ahora somos los indios. Por eso no queremos vender a los gringos, es por eso que nos hemos opuesto y movilizado. Finalmente hemos llegado a este gran movimiento y ahora estamos planteando la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada, porque este carnicero debe irse de este país (Felipe Quispe en entrevista realizada por *Altercom*. Octubre de 2003 <<http://www.altercom.org>> [Consultado: 18-10-2003]).

El discurso político de Quispe muestra la centralidad que aún existe en el imaginario político de la idea del rol del Estado como administrador de los recursos naturales.

c) Jaime Solares

Jaime Solares es dirigente obrero, militante del Partido Obrero Revolucionario Unificado de la Cuarta Internacional y Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). Durante la crisis fue miembro de la “Coordinadora del Gas” y si bien su trayectoria no es de alto perfil, busca recuperar espacios de intermediación política para la COB, que desde la revolución nacional, durante los gobiernos dictatoriales y hasta la “relocalización” de 1985, se constituyó en el principal mecanismo de mediación política, incluso por encima del sistema de partidos. La vanguardia minera se vio seriamente afectada con las reformas neoliberales y la liberalización laboral, lo que debilitó a la organización entera, la cual, desde entonces, se encuentra fragmentada y ha perdido la fundamental presencia indígena que hoy se articula en la CSUTCB. El intento de reposicionarse en el espacio político en octubre de 2003, no era simplemente una opción circunstancial sino una estrategia política, con diversos e infructuosos intentos previos, para recuperar legitimidad.

El discurso político de la COB presenta al neoliberalismo como el mecanismo para la consolidación del dominio imperialista, y los ajustes estructurales son considerados instrumentos para favorecer a las empresas transnacionales. Los principales adversarios son: los organismos financieros internacionales como el FMI, el BID, el BM, las transnacionales y los partidos que promovieron las reformas neoliberales, es decir, MNR, ADN y MIR. En varios artículos del Programa de la COB de 2003 exigen: la abrogación del D. S. 21060, la reversión al Estado de las empresas estratégicas privatizadas, impedir que el recurso natural agua sea entregado a consorcios privados y exigen la protección del Estado. Los destinatarios negativos son asociados con los “gobiernos serviles” y con las reformas neoliberales y el D.S. 21060:

Para nosotros el mejor plan de conciliación puede ser de que él [Sánchez de Lozada] abrogue la ley de hidrocarburos esto afecta a los intereses del país porque esta ley está entregando en boca de todos a las grandes transnacionales a un precio baratísimo y en lugar de esto no lo podemos permitir como bolivianos, cualquier gobierno está en el deber de poder defender sus recursos naturales y que si este hay que disponerlo a la venta al exterior pero siempre debe ser con una gran remuneración para que esto favorezca los intereses nacionales de cada país. Aquí no se trata de eso, Sánchez de Lozada parece que ya tiene todo comprometido para que el gas salga por Chile, y eso va a significar su caída, porque el pueblo no lo quiere más, ya nada a Sánchez de Lozada ni conciliación, ni concertación, ni nada, porque desde 1985 nos habla de conciliaciones, de concertaciones, pero a la fecha el pueblo no ha recibido nada, mas vista [la] política, no [ha] hecho otra cosa que traer más hambre, más miseria, más desocupación y los únicos que han salido gananciados [sic] de esta política son los corruptos del gobierno a la cabeza de Sánchez de Lozada (Jaime Solares en entrevista realizada por Paulina Castro el 2 de octubre de 2003 en Radio UDG – Guadalajara, México).

En el fragmento anterior, se puede percibir que el componente simbólico directamente vinculado a la figura del ex presidente Sánchez de Lozada, son las reformas neoliberales de 1985.

d) El discurso político del MNR

Si bien durante este trabajo se argumenta que desde 1985 el MNR y Gonzalo Sánchez de Lozada se han constituido en promotores de las reformas neoliberales, el análisis del discurso político contribuye a entender mejor la representación que hacen del neoliberalismo, especialmente en el Programa de Gobierno para las elecciones presidenciales de 2002, denominado “Plan de Emergencia”, documento extenso que permite analizar el rol que le asignan al Estado o a la importancia del libre mercado. Veamos algunos ejemplos:

También se debe desatar las amarras que frenan el desenvolvimiento de tantos bolivianos que no precisan del Estado para ganar su sustento, pero sí de un ambiente favorable para la realización plena de sus capacidades productivas. Es imperativo eliminar las trabas que ha creado el Estado para justificar su existencia, en contraposición a la libertad de los ciudadanos (MNR, 2002: 5).

El eje de articulación hegemónica del discurso claramente gira alrededor del neoliberalismo y de la importancia de las relaciones comerciales con el ámbito externo:

Para lograr este objetivo [superar la crisis económica], es preciso recuperar el manejo macroeconómico de la nación y enfrentar cada uno de los problemas del país. En un marco de estabilidad de precios y de equilibrio externo sostenible. [...] Este propósito se realizará consiguiendo una mayor holgura fiscal, fortaleciendo la capacidad del Estado para generar ingresos, optimizando la utilización de la cooperación externa y mejorando la eficiencia del gasto fiscal; también reconstruyendo la estructura del financiamiento externo de largo plazo, a fin de que sea la óptima (MNR, 2002: 7).

El discurso del MNR muestra una visión del modelo neoliberal y del rol del Estado que es compartida por los grandes partidos políticos que estuvieron en función de gobierno durante 22 años de continuidad democrática: ADN estuvo 14 años en el poder ejecutivo; el MIR 13 años y el MNR solamente 9, pero fueron principalmente sus gestiones las que llevaron adelante las principales reformas neoliberales. En resumen, esta visión de la orientación de la gestión pública representa la visión que hasta octubre de 2003 era la visión dominante de sistema político dentro del imaginario político boliviano.

Comentarios finales

En Bolivia, después de la revolución nacionalista y la construcción de un imaginario político con el Estado como factor de cohesión social y figura central, se produjo el tránsito hacia un Estado neoliberal que dejó de lado esas funciones para ser una instancia reguladora y facilitadora. Pero el entorno ideológico mantiene lógicas estatólatras y la comunidad política espera que el Estado siga siendo la instancia fuerte que defienda y garantice que los beneficios de los recursos naturales sean para el conjunto.

Con distintas formas de comprender el Estado y sus roles, con distintas concepciones de democracia y con una representación negativa del neoliberalismo, el gobierno de Sánchez de Lozada activó sentimientos adversos en una sociedad con una cultura política con predominio de orientación emotiva, de modo que la memoria colectiva asoció la exportación del gas sin valor agregado con siglo y medio de exportación de materias primas minerales al mercado externo, sin que los beneficios hayan mejorado significativamente las condiciones de vida para la mayoría de la población, al contrario el 38% de la riqueza se concentra en el 10% de la población más rica, mientras que el 12% de la riqueza se concentra en el 40% de la población más pobre.

Más allá de la presencia de diferentes y hasta contradictorias representaciones sociales, los acontecimientos de octubre muestran un Parlamento indolente ante los procesos sociales, económicos y políticos; un sistema de partidos que perdió conciencia de sus funciones; organizaciones sociales que no han superado la fase corporativa para lograr la fase hegemónica; y un proceso de ciudadanía inconcluso en una sociedad que espera todo del Estado aunque desconfía de todo lo que venga de él.

La actuación de las organizaciones políticas de la sociedad en octubre de 2003, muestra una política cultural en la que el Estado es representado como el factor central de cohesión de la vida social, pero al mismo tiempo es una movilización política

que promueve el tránsito de una democracia representativa hacia una democracia participativa de lógica asambleísta, de participación directa y fuera de la institucionalidad vigente, por lo cual, la debilita.

La debilidad institucional no sería un problema tan serio de no ser porque cuando el Estado se debilita, también se debilita la cohesión social. En una sociedad pluricultural y fragmentada sin un factor de cohesión legitimado lo que se producen son disociaciones: las demandas de territorios independientes, Estados propios, autonomías regionales, federalismo y de destrucción del Estado y del régimen democrático circulan junto a las demandas de incremento salarial o de empleo.

El escenario posterior a la crisis puede resumirse en crisis institucional, y los mecanismos de participación –formales e informales- que se están activando más allá de los órganos deliberantes del poder legislativo, muestran predominio de particularismos –sean corporativos, sectoriales o étnicos, pero gradualmente se pierde la visión de totalidad, incluso se debilita la posibilidad de mantener el país tal cual hoy lo conocemos en términos territoriales.

La crisis no se ha superado por completo, hoy (abril, 2005) el largo plazo son tres meses y está en manos del actual gobierno asumir la responsabilidad de mirar más allá de los índices e indicadores, de mirar las representaciones sociales que construyen realidades.

Referencias bibliográficas

- Antezana, Luis H. (1983) Sistema y proceso ideológicos en Bolivia. En René Zavaleta Mercado (comp.), *Bolivia, hoy*. México: Siglo XXI Editores, pp. 60-84.
- Barbero, Jesús Martín (1979) Hacia una teoría de la mass-mediación. *Scientia et praxis* (14): 24-29 (Universidad de Lima, Lima).
- Calderón G., Fernando y Roberto Laserna (1994) *Paradojas de la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia*. Serie: Temas de la modernización. La Paz: Fundación Milenio.
- Costa, Jimena (2003) El sentido de “democracia” en la cultura política boliviana. Análisis comparativo entre lógicas de comportamiento político en la democracia liberal y en la democracia aymara. Trabajo no publicado, Quito.
- Costa, Jimena; Arturo de la Riva y Franz Orozco (2003) *Informe de Milenio sobre el acontecer político en Bolivia*. N° 6 (agosto 2002 – agosto 2003). La Paz: Fundación Milenio.
- Laclau, Ernesto (1985) Tesis acerca de la forma hegemónica de la política. En Julio Labastida Marín del Campo (coord.), *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México y Siglo XXI Editores, pp. 19-44.
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (1987) *Hegemonía y estrategia socialista*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Landi, Oscar (1981) Sobre lenguajes, identidades y ciudadanía políticas. En Norbert Lechner (coord.), *Estado y política en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, pp.172-198.
- Lazarte, Jorge (1988) *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la COB 1952-1987)*. La Paz: Editorial Offset Boliviana, EDOBOL.

- Mato, Daniel (2001) Des-fetichizar la “globalización”: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores. En Daniel Mato (comp.), *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización-2*. Caracas: UNESCO y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 147-177.
- Mato, Daniel (2003) Actores sociales transnacionales, organizaciones indígenas, antropólogos y otros profesionales en la producción de representaciones de “cultura y desarrollo”. En Daniel Mato (coord.), *Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. pp. 331-354.
- Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (2002, junio) Plan de Emergencia. Para salir de la crisis, derrotar la corrupción y combatir la exclusión social. ¡Sí, se puede! *La Razón*, pp. 1-60.

